



INFORMACIÓN Y LOGROS DE LA UNIFICACIÓN DEL SISTEMA DE TELEFONÍA PARA EL PERSONAL DE INTERNOS RECLUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN

IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD

En la escala de las propuestas de solución a las necesidades mas sentidas de la población carcelaria en todo el país, ocupa un significativo peldaño el relacionado con el servicio de telefonía para los internos, como claro y vigente derecho de ley que permite garantizar el establecimiento de un permanente canal de comunicación entre estos y sus familias.

Sobre este particular, debe hacerse referencia a la posición de la ONU al adoptar mediante Resolución 43/173 del 9 de diciembre de 1988 estableció el **Conjunto de Principios Para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión**, documento en cuyo Principio 19 contempla:

"Toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser visitada, en particular por sus familiares, y a tener correspondencia con ellos y tendrá oportunidad adecuada de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones razonables determinadas por ley o reglamentos dictados conforme a derecho".

Consecuentemente, el Gobierno Colombiano sentó bases sólidas para el reconocimiento de los derechos de la población carcelaria en nuestro país, los que, en términos similares, fueron amparados por la legislación colombiana a través de la Ley 65 de 1993, Art. 111, reafirmando su respaldo a la política internacional en este sentido.

JUSTIFICACIÓN

No contar directamente con la posibilidad de prestar el servicio de telefonía para los internos a nivel nacional desde la misma institución, ha representado un retraso para unificar el servicio desde la Sede Central a través de sus respectivas Regionales, de tal forma se llevó a cabo este proyecto para beneficio propio de nuestros Internos.



Con el fin de satisfacer de la mejor forma esta sentida necesidad y procurar a los Internos la solución más efectiva en el universo moderno de la telefonía, dadas las múltiples quejas conocidas sobre el servicio, la Dirección General del Instituto considero necesario y conveniente acoger y poner en práctica un sistema de última tecnología, que al interior de los Establecimientos permita establecer el mas efectivo puente de comunicación entre los internos y sus familias, asegurando también herramientas de control mas ágiles a las administraciones de los centros carcelarios, que provean facilidad e inmediatez contable y eviten la interferencia de acostumbradas prácticas de alteración a los actuales esquemas de control.

ANTECEDENTES DEL SERVICIO TELEFÓNICO

- 1.- El servicio se presta en su gran mayoría con tradicionales teléfonos instalados en pasillos o patios de los Establecimientos sin control ni medida de seguridad por parte de las empresas.
- 2.- La contratación del servicio, se ha celebrado por parte de cada Director de Establecimiento con diversas empresas y bajo diversas modalidades, asumiendo ellos tal control, y la elaboración de los contratos estaba en cabeza de las empresas prestadoras del servicio.
- 3.- Se presentan fallas técnicas en la Prestación del Servicio e Irregularidades en el empleo de medios; algunos sistemas que operan con tarjetas, además de permitir su alteración, facilitan su comercialización por parte de los Internos, convirtiéndose en la práctica en dinero circulatorio para todo tipo de negocio.
- 4.- La proliferación de contratos, elaborados por cada empresa sin participación del Director del Establecimiento, presenta todo tipo de inconsistencias e inconveniencias que aislan al prestador del servicio de responder por anomalías que durante la vigencia del compromiso se presenten. Los problemas usualmente conocidos comprenden: Cláusulas Lesivas en materia de contratación y de prórrogas automáticas disfrazadas, excesos en el cobro de las tarifas, tales como (llamadas a líneas nacionales promedio entre \$400 y \$700, línea celular promedio entre \$ 400 y \$900 etc, por minuto,) permanentes fallas técnicas en el cobro de minuto donde se concreta entre 40 y 50 segundos, empresas que prestan el servicio sin ningún tipo de contrato al interior de los centros de Reclusión, pérdida de información de saldos de dinero cuando algunos internos son trasladados a diferentes Establecimientos, la no presencia oportuna del prestador del servicio cuando se requiere por averías o fallas en la comunicación, en algunos eventos extorsiones desde el interior de los Establecimientos, por que no existen sistemas actuales que bloqueen o ayuden a identificar de forma inmediata al individuo que realiza dicha conducta punible.



6.- De la misma manera, el condicionamiento acordado en los contratos excluye de muchos derechos legales al Instituto, cargando arbitrariamente a favor de la empresa las posibilidades de reclamar, prorrogar, o alegar beneficios no considerados originalmente.

Como consecuencia de lo expresado anteriormente, se puede citar el hecho de que la celebración del contrato a que da lugar un acuerdo entre la empresa y el establecimiento, no conlleva preocupación jurídica alguna para el funcionario del INPEC, por cuanto lo pactado soterradamente prevalece por sobre los intereses institucionales. De esta forma, siempre son las empresas las que llevan la iniciativa en la elaboración del documento base del compromiso contractual para fijar los términos jurídicos que les otorga un manejo amañado del mismo y en limitaciones para la entidad.

7.- Deficiencia Administrativa en la calificación y evaluación del servicio técnico ofrecido que permite la permeabilidad de factores nocivos al comportamiento de algunos funcionarios, dejando también en manos del contratista la manipulación de la modalidad del contrato.

8.- Se estableció la problemática planteando a nivel nacional encuestas sobre la prestación del servicio de telefonía por parte del INPEC para los actuales contratistas, arrojando un resultado alarmante en su mayoría por las continuas deficiencias en la prestación del mismo.

FORMA DE ASIGNACIÓN DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO TELEFÓNICO

Ahora bien, en el contexto de las políticas adoptadas por esta administración, se dispuso en su momento efectuar una revisión integral sobre el tema de comunicaciones con sujeción a lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley 65 de 1993, de manera que cumplido tal propósito se garantizaron elementos de juicio que permitieron definir la opción de contratación más favorable a la administración; sobre la primacía del buen servicio para una población carcelaria que dicho sea de paso, merece condiciones dignas en todo sentido, y es la que cancela el servicio.

En tales condiciones, independiente de lo vulnerable que resulte el asunto, desde luego, para quienes de alguna manera se han constituido de tiempo atrás en contratistas en los diferentes Centros Penitenciarios y consideran les asiste derecho a permanecer en su centro de operaciones, ésta Administración determinó celebrar sólo 6 contratos uno para cada Dirección Regional, en procura de determinar los beneficios mencionados, sujetándose al vencimiento de cada uno de los mismos.



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC
Ministerio del Interior y de Justicia
República de Colombia

Teniendo en cuenta que el INPEC NO CUENTA con apropiación presupuestal, ni recursos propios para efectuar una contraprestación de tipo pecuniaria a las empresas que presten el servicio de telefonía a sus internos, por que no corresponde cancelar dicho servicio.

Como quiera que tales contratos no generan carga económica o afectan presupuestalmente al INPEC, en tanto que como se ha concebido el servicio, el mismo va destinado a satisfacer las condiciones y necesidades de comunicación que le asisten al Interno, quien directamente sufraga su costo, la forma de asignación de los contratos no podía ser mediante un proceso de licitación pública, no obstante desde el año 2006, se han venido estableciendo unos factores determinantes mínimos para la asignación de los contratistas que prestarían el servicio. Es de anotar que los contratistas existentes nunca se han asignado mediante Licitación Pública, o Concurso Público, y mucho menos han constituido garantía de cumplimiento.

En consecuencia y analizados los portafolios de servicio presentados por 23 empresas interesadas, la Dirección General determinó asignar los contratos así:

REGIONAL	PRESTADOR DEL SERVICIO
CENTRAL	PREPACOL LTDA.
OCCIDENTE	CONSORCIO TELENACIONAL
VIEJO CALDAS	GRECO TELECOMUNICACIONES S.A
ORIENTE	TELPHIONIX S.A.
NORTE	SEMACON LTDA.
NOROESTE	AVITEL COMUNICACIONES S.A

En la actualidad existen contratos en algunos Centros de Reclusión cuya vigencia superan las fechas acordadas para iniciar los nuevos servicios, hecho que va en contravía a lo establecido en la Circular No. 029 del 11 de Julio de 2005, expedida por la Dirección General, en donde determinó incluir en todo convenio o contrato la cláusula "No se producirá la prórroga automática".

Por lo tanto se está estudiando jurídicamente la viabilidad de dar por terminados anticipadamente dichos contratos de común acuerdo.